

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA (pp. 1-9)**

—

**DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
(pp. 10-17)**

MARTA OLLER RUBERT

*Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada
doctora de Dret Administratiu*

Universitat Jaume I

Sumario: 1. Riesgo de inundaciones: Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (DOCV, núm. 7649, de 3 de noviembre de 2015). 2. Ley de medidas: Ley 10/2015, de 29 de noviembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (DOCV, núm. 7689, de 31 de diciembre de 2015). 3. Órganos ambientales. 3.1. Órgano ambiental a los efectos de evaluación ambiental estratégica: Decreto 230/2015, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del órgano ambiental de la Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas) (DOCV, núm. 7676, de 11 de diciembre de 2015). 3.2. Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente: Decreto 5/2016, de 22 de enero, del Consell (DOCV, núm. 7705, de 26 de enero de 2016). 4. Parajes naturales municipales: Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm. 7725, de 22 de febrero de 2016).

1. Riesgo de inundaciones: Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana (DOCV, núm. 7649, de 3 de noviembre de 2015)

Una vez más estamos ante una norma que no viene a establecer un nuevo instrumento para la protección del medio natural en la Comunidad Valenciana, sino que se aprueba con el fin de adecuar los instrumentos ya existentes —en este caso, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICCIVA, más adelante ha pasado a denominarse PATRIVOCA)— al nuevo marco jurídico impuesto por la Unión Europea —a través de la Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, traspuesta por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio— y por la normativa autonómica, principalmente la ya conocida Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, y la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell. Además de la adecuación normativa, deben tenerse en cuenta otros factores que hacen necesaria esta nueva normativa como el aumento de población en la Comunidad Valenciana, los avances tecnológicos que permiten nuevos estudios cartográficos y la aparición de nuevas zonas de riesgo de inundaciones, siendo además el territorio autonómico valenciano un lugar en el que se puede destacar, en general, el alto riesgo de inundaciones si tenemos en cuenta que, de los 542 municipios existentes, 442 están en situación de riesgo de inundación.

Los objetivos del Plan, como señala el artículo 2 son:

- a) Obtener un adecuado conocimiento y evaluación de los riesgos de inundación en el territorio de la Comunidad Valenciana.

- b) Establecer procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable inundabilidad a los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el territorio.
- c) Lograr una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes sociales para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad económica y los equipamientos e infraestructuras.
- d) Orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes.
- e) Gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua.

Con el fin de lograr los objetivos anteriores, debemos destacar de la regulación analizada el hecho de que la planificación urbanística va a verse condicionada por el riesgo de inundación, de forma que todas aquellas zonas incluidas en alguno de los niveles de peligrosidad —seis, según dispone el reglamento— formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio, permitiéndose supuestos excepcionales en los que, aun existiendo un riesgo de inundación, algunas zonas de peligrosidad queden excluidas, de manera justificada, de la Infraestructura Verde. Asimismo, y como novedad del PATRICOVA de 2015, es necesario hacer referencia a la introducción del “riesgo geomorfológico” como factor a tener en cuenta para la calificación de una zona como de riesgo.

Se desprende asimismo del reglamento que las consecuencias de considerar una zona como de riesgo implican una serie de condicionamientos urbanísticos, como se ha dicho, que van desde prohibir cualquier tipo de edificación hasta permitir solo determinados usos.

También se incide en el articulado en la necesidad de que se adecuen las infraestructuras ubicadas en zonas de riesgo y en la necesidad de una correcta señalización de las zonas inundables. Otro de los aspectos regulados en la norma es el de las denominadas

“actuaciones de defensa”, que están destinadas a disminuir el riesgo de inundación, por lo que tienen una importante finalidad preventiva.

Finalmente, y siguiendo las indicaciones europeas y conforme a los objetivos señalados en el artículo 2, a lo largo del texto se hace especial hincapié en la necesidad de coordinación entre las administraciones.

2. Ley de medidas: Ley 10/2015, de 29 de noviembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (DOCV, núm. 7689, de 31 de diciembre de 2015)

La denominada Ley de Acompañamiento, aprobada en noviembre de 2015, ha comportado algunas modificaciones importantes en relación con una mejor protección del medio natural en el ámbito valenciano. En efecto, diversas normas se han visto afectadas, como pasamos a considerar.

La primera de ellas ha sido la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en la que, como novedad, ha desaparecido la posibilidad prevista en el anterior artículo 59.4 de que se exceptuara la prohibición general de cambio de uso de los terrenos forestales que hubieran sufrido incendios forestales por un período de treinta años cuando se tratase de proyectos de obras e infraestructuras declaradas de interés general. De esta manera, ahora se aplica el régimen general, que supone la imposibilidad de cambios de usos del terreno forestal que haya sufrido un incendio.

También se ha visto afectada la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, puesto que se ha producido una notable ampliación en cuanto a la protección del medio natural, ya que el nuevo artículo 33 establece un tratamiento específico para las áreas de amortiguación de los parques naturales, de forma que más del 12% del territorio queda, a partir de ahora, especialmente protegido.

Además, se modifican diversos artículos de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana.

En primer lugar, el artículo 3, sobre el ámbito de aplicación, excluye las actividades comerciales minoristas y la prestación de servicios de los mecanismos previstos en esta norma para controlar la incidencia ambiental de dichas actividades.

A su vez, el artículo 11 establece como prioritarias las medidas de control previstas en la Ley, pues exige que la AAI se emita con carácter previo a la obtención de cualquier otra forma de intervención administrativa que requieran las actividades industriales.

El artículo 21, en su apartado primero, ha determinado que el promotor ya no tiene la obligación sino la posibilidad de presentar, ante el órgano sustantivo ambiental, solicitud dirigida al órgano ambiental de elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental, acompañando el documento inicial del proyecto con el contenido mínimo y los requisitos formales establecidos en la normativa de evaluación de impacto ambiental de proyectos.

En el procedimiento de solicitud de autorización ambiental integrada previsto en el artículo 27, se suprime el apartado 3, por lo que no es necesario aportar el plan de autoprotección con la solicitud, sino, como comentaremos seguidamente, en un momento posterior, el del comienzo de la actividad.

Se completa también el artículo 44, relativo al inicio de la actividad objeto de AAI, donde se exige un plan de autoprotección para el inicio de esta.

Sobre el régimen de revocación y anulación de la AAI, en el artículo 49 se añade una remisión a la Ley 30/1992, y de modo similar se hace en el artículo 64 respecto a la licencia ambiental.

En el caso de las licencias ambientales, se modifica el régimen de publicidad en la práctica del trámite de información pública, y se incorpora la necesaria publicación electrónica en el artículo 55.1.

El artículo 57 hace especial hincapié, tras su modificación, en la práctica del trámite de información pública, pues especifica que las alegaciones realizadas en este deberán ser remitidas al órgano autonómico ambiental.

Es asimismo relevante la modificación del artículo 69, sobre la declaración responsable, ya que se elimina la necesidad de que en el plazo máximo de un mes se indicara la actividad a la que se refiere la declaración responsable, estableciéndose que,

transcurrido un mes desde la presentación, se podrá iniciar la actividad para la que se presentó la solicitud.

El nuevo apartado 5 de la disposición adicional sexta, sobre cambio de régimen de intervención administrativa ambiental aplicable, hace referencia a las AAI otorgadas conforme a la Ley 2/2006, que se mantendrán, salvo modificaciones.

El anexo II, sobre categorías de actividades sujetas a licencia ambiental, también ha sido objeto de modificación, en concreto su apartado 7, relativo a la industria textil, en el que se han eliminado actividades sujetas a licencia ambiental.

Y el anexo III, sobre condiciones para determinar la inclusión de actividades en el régimen de declaración responsable ambiental o en el de comunicación de actividades inocuas, también ve modificado su apartado 9, relativo a las actividades con riesgo de legionelosis.

3. Órganos ambientales

3.1. Órgano ambiental a los efectos de evaluación ambiental estratégica: Decreto 230/2015, de 4 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del órgano ambiental de la Generalitat a los efectos de evaluación ambiental estratégica (planes y programas) (DOCV, núm. 7676, de 11 de diciembre de 2015)

La Comisión de Evaluación Ambiental de la Comunidad Valenciana se creó mediante el Decreto 123/2013, de 20 de septiembre, siendo su función la adopción de los pronunciamientos ambientales de resolución de los procedimientos de evaluación ambiental, para cumplir así con el mandato de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, hoy sustituida por la Ley 21/2013. Al cambio normativo anterior debe sumarse la aprobación de la nueva ley urbanística valenciana, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), que, aun manteniendo la Comisión, establece una nueva ordenación de esta que responda a la nueva estructura orgánica de la Generalitat Valenciana tras el cambio de gobierno producido en el año 2015, y que, además, orgánicamente procure una adecuada representación en ella de los órganos que participan de forma más relevante en los procesos de evaluación ambiental.

A la vista de los precedentes anteriores, el Reglamento aprobado por el Decreto 230/2015 establece que las competencias de evaluación ambiental estratégica (planes y programas) corresponden a los siguientes órganos:

1. La dirección general con competencias en materia de evaluación ambiental.
2. La Comisión de Evaluación Ambiental, que tendrá la naturaleza de órgano colegiado y dependerá orgánicamente del secretario/a autonómico/a con competencia en medio ambiente.

Las principales funciones de la dirección general competente son realizar el examen técnico de la evaluación ambiental estratégica (EAE) y elevar propuestas a la Comisión, y también le corresponde declarar la inadmisión y finalización del procedimiento de EAE.

De acuerdo con lo anterior, las competencias sustantivas se atribuyen a la Comisión, que es quien adopta los acuerdos sobre los documentos de alcance y las declaraciones ambientales estratégicas de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica ordinaria y sobre los informes ambientales estratégicos de los planes y programas sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada. Además, también ejerce funciones consultivas.

En cuanto a su composición, el presidente/a de la Comisión de Evaluación Ambiental será el/la secretario/a autonómico/a competente en materia de medio ambiente, que dirigirá los debates de la Comisión, convocará y levantará sus sesiones y dirimirá las votaciones con su voto de calidad, además de fijar su orden del día y someter a su deliberación asuntos urgentes fuera de este; la vicepresidencia, con voz y voto, le corresponderá al director/a general competente en materia de evaluación ambiental, siendo su principal tarea la de auxiliar y sustituir al presidente/a.

El resto de miembros serán vocales, distinguiéndose entre aquellos que tienen voz y voto según el artículo 7 y aquellos que tienen voz pero no voto (en este último caso, personas designadas por el secretario/a autonómico/a entre profesionales de reconocido prestigio en materia de medio ambiente, paisaje o planificación urbanística y territorial).

Como secretario/a actuará un funcionario/a de la Generalitat adscrito/a a la dirección general competente en materia de evaluación ambiental.

En cuanto al régimen de las sesiones, se establece que la Comisión se reunirá en sesión ordinaria ocho veces al año y en sesión extraordinaria cuando su presidente/a, o quien lo sustituya, la convoque.

3.2. Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente: Decreto 5/2016, de 22 de enero, del Consell (DOCV, núm. 7705, de 26 de enero de 2016)

Con esta norma se deroga el anterior Decreto 242/1993, de 7 de diciembre, del Consell, de creación del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente, y se establece una nueva regulación actualizada y adaptada a las nuevas exigencias en materia ambiental.

El Consejo sigue desempeñando su principal tarea, que es ser órgano asesor y cauce de participación de instituciones y entidades públicas y privadas en materia de medio ambiente.

En cuanto a las funciones a realizar por el Consejo, cabe destacar que, a nuestro juicio, se pretende potenciar su labor, pues, si bien las funciones siguen siendo las de asesorar, también es cierto que con la nueva norma tiene que conocer e informar cualquier programa y/o proyecto normativo de la *conselleria* con competencias en materia de medio ambiente, cuando anteriormente sus funciones eran más limitadas, pues se señalaba que en el caso de proyectos normativos quedaba a la decisión de la Consellería la intervención del Consejo, pues no se establecía con carácter preceptivo la consulta al mismo.

Los órganos de funcionamiento siguen siendo los mismos: el Pleno y la Comisión Asesora, además de las posibles comisiones de trabajo para tratar materias específicas.

4. Parajes naturales municipales: Decreto 15/2016, de 19 de febrero, del Consell, de regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana (DOCV, núm. 7725, de 22 de febrero de 2016)

El anterior Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell, de regulación de los parajes naturales municipales, se deroga tras la aprobación del presente Decreto 15/2016, de 19 de febrero. La existencia de esta categoría tiene como finalidad habilitar mecanismos de protección, ordenación y gestión para valores significativos del

patrimonio natural de los municipios, con el fin de preservarlos para las generaciones futuras y de ponerlos en valor como recurso ambiental.

A partir del año 2013, de entre los instrumentos de ordenación de los parajes naturales municipales, se eliminaron los llamados “planes especiales”, siendo los instrumentos destinados a su ordenación los planes de ordenación de los recursos naturales, los planes rectores de uso y gestión y las normas de gestión. Esto significó que los ayuntamientos eran competentes para aprobar ordenanzas en las que se recogiera la normativa pormenorizada de estos parajes naturales municipales, lo que les confería, pues, un mayor protagonismo. En consecuencia, con la norma que se comenta se pretende coordinar las administraciones intervenientes, la autonómica y la municipal.

Para ello, establece que la iniciativa para la declaración de “paraje natural municipal” le corresponde al municipio afectado, que debe presentar la solicitud a la *conselleria* competente, si bien la propuesta para la declaración puede ser de oficio o a instancia de personas o entidades interesadas, y, en particular, de los vecinos y los grupos, entidades o asociaciones que se ocupen y tengan por finalidad primordial la conservación del medio natural.

La labor del órgano autonómico es de gran relevancia puesto que el informe técnico que emite determina la viabilidad de la propuesta, informe que, debe destacarse, es vinculante ya que del articulado se desprende que solo podrá realizarse la declaración de paraje natural municipal si el informe es favorable. En este procedimiento, son importantes los trámites que garantizan el derecho a la información y a la participación en materia de medio ambiente, pues se habilitan con carácter obligatorio la necesaria información pública y el derecho de audiencia de las entidades y asociaciones que ejerzan la representación de los intereses afectados por la declaración, además de informes técnicos sectoriales que resulten preceptivos o que se estimen oportunos por la naturaleza del proyecto de decreto de declaración.

Tras la declaración de paraje natural municipal, se determina que su gestión corresponderá al ayuntamiento promotor y, lo que es más interesante, se prioriza esta declaración sobre el desarrollo urbanístico, de forma que, como establece el artículo 8.3: “El planeamiento urbanístico de los municipios incluidos en el ámbito del paraje deberá adaptarse a la normativa básica de protección y ordenación de usos establecida por el correspondiente decreto de declaración del paraje natural municipal. Mientras dicha

adaptación no se produzca, en caso de conflicto prevalecerán las determinaciones establecidas en el citado decreto de declaración”.

Asimismo, también le corresponderá al ayuntamiento la ordenación pormenorizada del paraje natural municipal, que deberá realizar por ordenanza dentro de los dos años siguientes a la fecha de la declaración. Una norma que —de nuevo, y en nuestra opinión, limitando la autonomía municipal reconocida tanto por la Constitución como por la jurisprudencia— deberá ser remitida a la *conselleria* competente para que esta analice en términos de legalidad si es adecuada o no a lo dispuesto en la normativa básica de protección contenida en el decreto de declaración.

Como señalábamos antes, se hace hincapié en la necesaria coordinación entre las administraciones públicas y también en la cooperación tanto a nivel autonómico como provincial y local. Colaboración que no solo afecta a la necesidad de cooperar con medios y recursos humanos y técnicos, sino que, en el caso de la *conselleria*, se establece que la cooperación pueda ser incluso de tipo económica, si bien la financiación de los parajes naturales municipales correrá principalmente por cuenta del ayuntamiento o ayuntamientos promotores.

Sumari: 1.Risc d'inundacions: Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual es aprova el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7649 de 03.11.2015) .2. Llei de mesures: Llei 10/2015, de 29 de novembre, de mesures fiscals, de gestió administratives i financeres i d'organització de la Generalitat. 3.Òrgans ambientals: 3.1. Òrgan ambiental a l'efecte d'avaluació ambiental estratègica: Decret 230/2015, de 4 de desembre (DOCV núm. 7676 d'11.12.2015) 3.2. Consell Assessor i de participació del Medi ambient: Decret 5/2016, de 22 de gener, del Consell (DOCV núm. 7705 de 26.01.2016). 4.Paratges naturals municipals : Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7725 de 22.02.2016).

1.Risc d'inundacions: Decret 201/2015, de 29 d'octubre, del Consell, pel qual es aprova el Pla d'acció territorial sobre prevenció del risc d'inundació a la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7649 de 03.11.2015)

Una vegada més estem davant una norma que no ve a establir un nou instrument per a la protecció del mitjà natural a la Comunitat Valenciana, sinó que s'aprova amb la finalitat d'adecuar els instruments ja existents —en aquest cas el Pla d'acció territorial sobre prevenció de riscos d'inundació a la Comunitat Valenciana (PATRICCIVA, més endavant passa a denominar-se PATRICOVA)— al nou marc jurídic impost tant des de la Unió Europea —a través de la Directiva 2007/60/CE, relativa a l'avaluació i gestió dels riscos d'inundació, traslladada pel RD 903/2010, de 9 de juliol— i per la normativa autonòmica, principalment la ja coneguda Llei 5/2014, de 25 de juliol i l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprovada pel Decret 1/2011, de 13 de gener, del Consell. A això ha de sumar-se altres factors com és l'augment de població a la Comunitat Valenciana, els avanços tecnològics que permeten nous estudis cartogràfics i l'aparició de noves zones de risc d'inundacions, sent a més el territori autonòmic un lloc en el qual es pot destacar, en general, l'alt risc d'inundacions, si tenim en compte que dels 542 municipis existents, 442 estan en situació de risc d'inundació.

Els objectius del Pla, com assenyala l'article 2 són :

- a) Obtenir un adequat coneixement i avaluació dels riscos d'inundació al territori de la Comunitat Valenciana.
- b) Establir procediments administratius àgils i rigorosos per incorporar la variable inundabilitat als plans, programes i projectes que tinguin una projecció sobre el territori.
- c) Aconseguir una actuació coordinada de totes les administracions públiques i els agents socials per reduir les conseqüències negatives de les inundacions sobre la salut

de les persones i els béns, el medi ambient, el patrimoni cultural, el paisatge, l'activitat econòmica i els equipaments i infraestructures.

- d) Orientar els desenvolupaments urbanístics i territorials cap a les àrees no inundables o, si escau, cap a les de menor perillositat d'inundació, sempre que permetin l'assentament, atorgant preferència als models urbans i territorials més eficients.
- i) Gestionar les zones inundables dins del sistema territorial de la Infraestructura Verda, afavorint la producció dels serveis ambientals, així com la conservació i millora dels paisatges naturals i culturals entorn de l'aigua.

Amb la finalitat d'aconseguir els mateixos hem de destacar de la regulació del reglament, el fet que la planificació urbanística va a estar condicionada pel risc d'inundació, de manera que totes aquelles zones incloses en algun dels nivells de perillositat —que són segons el Decret fins a 6— formaran part de la Infraestructura Verda del territori, permetent-se suposats excepcionals, en els quals àdhuc existint un risc d'inundació, quedin les zones de perillositat excloses de la Infraestructura Verda de manera justificada. Com a novetat del PATRICOVA de 2015 és necessari fer referència la introducció del “risc geomorfològic” com a element a tenir en compte per a la identificació de risc d’ inundació. .

Les conseqüències d'incloure a una zona com de risc implica una sèrie de condicionaments urbanístics, que van des de prohibir qualsevol tipus d'edificació fins a permetre solament determinats usos.

També s'incideix en l'articulat en la necessitat que es adequen les infraestructures situades en zones de risc i en la necessitat d'una correcta senyalització de les zones inundables.

Un altre dels aspectes regulats en la norma és el de les denominades “actuacions de defensa” que estan destinades a disminuir el risc d'inundació i que tenen un important caràcter preventiu.

Finalment, i seguint les indicacions europees, i conforme als objectius assenyalats en l'art.2, al llarg del text, es posa l'accent principalment en la necessitat de coordinació entre les Administracions.

2. Llei de mesures: Llei 10/2015, de 29 de novembre, de mesures fiscals, de gestió administratives i finançera i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 7689 de 31.12.2015)

La denominada Llei d'acompanyament aprovada al novembre de 2015 ha suposat algunes modificacions importants, en tant han suposat un canvi en relació amb la protecció ambiental. En efecte, diverses normes s'han vist afectades, que passem a comentar:

La primera d'elles ha estat la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en la que ha desaparegut la possibilitat prevista en l'anterior art.59.4 que s'excepcionarà la prohibició general de canvi d'ús dels terrenys forestals, que haguessin sofert incendis forestals per un període de 30 anys, quan es tractés de projectes d'obres i infraestructures declarades d'interès general. D'aquesta manera ara s'aplica el règim general que suposa la impossibilitat de canvis d'usos del terreny forestal que hagués sofert incendi.

També s'ha vist afectada la Llei 11/1994, de 27 de desembre, d'espais naturals protegits de la Comunitat Valenciana produint-se una notable ampliació quant a la protecció del mitjà natural, ja que el nou article 33 estableix un tractament específic a les àrees d'amortiment dels Parcs Naturals, de manera que més del 12% del territori queda especialment protegit.

A més, es modifiquen diversos articles de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats a la Comunitat Valenciana.

En primer lloc, l'art.3 sobre àmbit d'aplicació, exclou a les activitats comercials minoristes i la prestació de serveis dels mecanismes previstos en aquesta norma per controlar la incidència ambiental d'aquestes activitats.

Al seu torn l'art.11 estableix com a prioritàries les mesures de control previstes en la Llei, doncs exigeix que la AAI s'emeti amb caràcter previ a l'obtenció de qualsevol altra forma d'intervenció administrativa que requereixi les activitats industrials.

L'art.21 al seu apartat primer ha determinat que el promotor ja no té l'obligació, sinó la possibilitat de presentar, davant l'òrgan substantiu ambiental, sol·licitud dirigida a l'òrgan ambiental d'elaboració del document d'abast de l'estudi d'impacte ambiental,

acompanyant document inicial del projecte amb el contingut mínim i requisits forma els establerts en la normativa d'avaluació d'impacte ambiental de projectes.

En el procediment de sol·licitud d'autorització ambiental integrada previst en l'art.27 se suprimeix l'apt.3 pel que el pla d'autoprotecció no és necessari aportar-ho amb sol·licitud, sinó com comentarem seguidament, en un moment posterior, que és el de començament de l'activitat.

Es completa també l'art.44 que es refereix a l'inici de l'activitat objecte de AAI, on s'exigeix per a l'inici de la mateixa un pla d'autoprotecció.

Sobre el règim de revocació i anul·lació de la AAI en l'art.49 s'afegeix una remissió a la Llei 30/1992, i de manera similar es fa en l'art.64 per a la llicència ambiental. En el cas de les llicències ambientals es modifica en la pràctica del tràmit d'informació pública, el règim de publicitat, incorporant-se la necessària publicació electrònica en l'art.55.1.

L'Art.57 posa l'accent principalment, després de la modificació, en la pràctica del tràmit d'informació pública, doncs especifica que les al·legacions realitzades en el mateix hauran de ser remeses a l'òrgan autonòmic ambiental.

És així mateix rellevant la modificació de l'art.69 sobre la declaració responsable ja que s'elimina la necessitat que en màxim un mes s'indiqués l'activitat a la qual es refereix la declaració responsable, establint que transcorregut un mes des de la presentació podrà iniciar l'activitat per la qual va presentar la sol·licitud.

La DA Sisena sobre canvi de règim d'intervenció administrativa ambiental aplicable en el nou apt.5 fa referència a les AAI atorgades conformes a la Llei 2/2006, que es mantindran excepte modificacions.

L'Annex II sobre Categories d'activitats subjectes a llicència ambiental també ha estat objecte de modificació, en concret en el aptdo.7 relatiu a la indústria tèxtil s'han eliminat activitats subjectes a llicència ambiental.

I l'Annex III sobre condicions per determinar la inclusió d'activitats en el règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitats innòcues, també es aadecua en el cas de l'apt.9. sobre activitats amb el risc de legionellosis.

3. Òrgans ambientals

3.1. Òrgan ambiental a l'efecte d'avaluació ambiental estratègica: Decret 230/2015, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'òrgan ambiental de la Generalitat a l'efecte d'avaluació ambiental estratègica (plans i programes).

La Comissió d'Avaluació Ambiental de la Comunitat Valenciana es va crear pel Decret 123/2013, de 20 de setembre, sent la seva funció l'adopció dels pronunciaments ambientals de resolució dels procediments d'avaluació ambiental, per complir així amb el mandat de la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, avui substituïda per la Llei 21/2013. Al canvi normatiu anterior, ha de sumar-se, l'aprovació de la nova Llei urbanística valenciana, la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), que mantenint a la Comissió, requereix d'una nova ordenació de la mateixa que respongui a la nova estructura orgànica de la Generalitat Valenciana, després del canvi de govern que es va produir l'any 2015, i que a més, orgànicament, procurés una adequada representació en la mateixa dels òrgans que participen de forma més rellevant en els processos d'avaluació ambiental. D'acord amb el Reglament les competències d'avaluació ambiental estratègica (plans i programes) li corresponen als següents òrgans:

1. La direcció general amb competències en matèria d'avaluació ambiental.
2. La Comissió d'Avaluació Ambiental, que tindrà la naturalesa d'òrgan col·legiat i dependrà orgànicament del Secretari/a Autonòmic/a amb competència al mig ambient. La principals funcions de la direcció general competent són la de realitzar l'examen tècnic de la Avaluació Ambiental Estratègica (EAE) i elevar propostes a la Comissió, i també li correspon declarar la inadmissió i finalització del procediment de EAE.

D'acord amb l'anterior les competències substantives s'atribueixen a la Comissió, que és qui adopta els acords dels documents d'abast i les declaracions ambientals estratègiques dels plans i programes sotmesos a avaluació ambiental estratègica ordinària i sobre els informes ambientals estratègics dels plans i programes sotmesos a avaluació ambiental estratègica simplificada. A més, també exerceix funcions consultives.

Quant a la seva composició : el President la Comissió d’Avaluació Ambiental serà el/la secretari/a autonòmic/a competent en matèria de medi ambient, dirigint els debats de la comissió, convocant i aixecant les seves sessions i dirimint les votacions amb vot de qualitat, a més de fixar la seva ordre del dia i sotmetre a la seva deliberació assumptes urgents anés d’ell, la vicepresidència, amb veu i vot, li correspondrà al director/a general competent en matèria d’avaluació ambiental, sent la seva principal tasca la d’auxiliar i substituir al president.

La resta de membres seran vocals, distingint-se entre aquells que tenen veu i vot en l’art.7 i uns altres que té veu, però no vot i que es refereix a persones designades pel secretari autonòmic entre professionals de reconegut prestigi en matèria de medi ambient, paisatge o planificació urbanística i territorial.

Com a secretari actuarà un funcionari de la Generalitat adscrits/as a la direcció general competent en matèria d’avaluació ambiental.

Quant al règim de les sessions s’estableix que la comissió es reunirà en sessió ordinària vuit vegades a l’any i en sessió extraordinària quan el seu president/a, o qui ho substitueixi, la convoqui.

3.2. Consell Assessor i de participació del Medi ambient: Decret 5/2016, de 22 de gener, del Consell (DOCV núm. 7705 de 26.01.2016)

Amb aquesta norma es deroga l’anterior Decret 242/1993, de 7 de desembre, del Consell, de creació del Consell Assessor i de Participació del Medi ambient, i s’atorga una nova regulació actualitzada i adaptada a les noves exigències en matèria ambiental. El Consell segueix exercint la seva principal tasca que és ser òrgan assessor i llit de participació d’institucions i entitats públiques i privades en matèria de medi ambient. Quant a les seves funcions a realitzar pel Consell destaca com es pretén, al nostre judici, potenciar la seva labor, doncs si bé les funcions segueixen sent les d’assessorar, també és cert que amb la nova norma ha de conèixer i informar de qualsevol programa i/o projecte normatiu de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient, quan anteriorment s’assenyalava que en el cas de projectes normatius de la Conselleria, era esta la que determinava si demanava informe al Consell Assessor, sense que fóra preceptiva la consulta.

Els òrgans de funcionament segueixen sent els mateixos: el ple i la comissió assessorada, a més de les possibles Comissions de treball per tractar matèries específiques.

4. Paratges naturals municipals: Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7725 de 22.02.2016)

L'anterior Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals es deroga després de l'aprovació del present Decret 15/2016 dels paratges naturals municipals. L'existència d'aquesta categoria té com a finalitat habilitar mecanismes de protecció, ordenació i gestió per a valors significatius del patrimoni natural dels municipis, amb la finalitat de preservar-los per a les generacions futures i de posar-los en valor com a recurs ambiental.

A partir de l'any 2013 d'entre els instruments d'ordenació dels paratges naturals municipals, es van eliminar els anomenats “plans especials”, sent els instruments destinats a la seva ordenació: els plans d'ordenació dels recursos naturals., els Pla de recte i gestió i les Normes de gestió. Això va significar que els ajuntaments eren els competents per aprovar ordenances en les quals es recollís la normativa detallada d'aquests paratges naturals municipals, donant-los doncs un major protagonisme. En conseqüència, amb la norma que es comenta, es pretén coordinar a les Administracions intervinguts, l'autonòmica i la municipal.

Per a això estableix com la iniciativa correspon al municipi afectat, que ha de presentar la sol·licitud a la Conselleria, si bé les proposta per a la declaració pot ser d'ofici o a instàncies de persones o entitats interessades, i, en particular, dels veïns i els grups, entitats o associacions que s'ocupin i tinguin per finalitat primordial la conservació del mitjà natural.

La labor de l'òrgan autonòmic és de gran rellevància, ja que l'informe tècnic que emet determina la viabilitat de la proposta, informe que ha de destacar-se és vinculant ja que es desprèn de l'articulat que solament podrà realitzar-se la declaració del paratge natural municipal, si l'informe és favorable. En aquest procediment, són importants els tràmits que garanteixen el dret a la informació i a la participació en matèria medi ambient, doncs s'habilita amb caràcter obligatòria la necessària informació pública, així com el dret d'audiència de les entitats i associacions que exerceixin la representació dels

interessos afectats per la declaració, a més d'informes tècnics sectorials que resultin preceptius, o que s'estimin oportuns per la naturalesa del projecte de decret de declaració.

Després de la declaració de paratge natural municipal es determina que la gestió del mateix li correspon a l'ajuntament promotor i el que és mes interessant es prioritza aquesta declaració sobre el desenvolupament urbanístic, de manera que com diu l'art. 8.3: “El planejament urbanístic dels municipis inclosos en l'àmbit del paratge haurà d'adaptar-se a la normativa bàsica de protecció i ordenació d'usos establerta pel corresponent decret de declaració del paratge natural municipal. Mentre aquesta adaptació no es produueixi, en cas de conflicte prevaldran les determinacions establertes en el citat decret de declaració”.

Així mateix, també li correspon a l'ajuntament l'ordenació detallada del paratge natural municipal, que haurà de realitzar per ordenança dins dels dos anys següent a la data de la declaració. Una norma que -de nou, i en la nostra opció limitant l'autonomia municipal reconeguda tant per la Constitució, com per la jurisprudència- ha de ser remesa a la Conselleria competent perquè aquesta analitzi en termes de legalitat si és adequada al que es disposa en la normativa bàsica de protecció continguda en el decret de declaració.

Com abans assenyalàvem, es posa l'accent en la necessària coordinació entre les Administració públiques, i també en la cooperació que afecten en aquest cas tant al nivell autonòmic, com a provincial i local. Col·laboració que no solament afecta als elements i recursos personals i tècnics, sinó que en el cas de la Conselleria es possibilita que pugui ser fins i tot econòmica, si bé el finançament principal dels paratges naturals municipals correrà per compte de l'ajuntament o ajuntaments promotores.